

Santiago, tres de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos Rol N° **C-42-2021** del Segundo Juzgado Civil de Punta Arenas, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, acogió la demanda de indemnización de perjuicios condenando al fisco a la suma de treinta millones pesos (\$30.000.000).

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, por sentencia de catorce de noviembre de dos mil veintidós, confirmó la sentencia apelada de veintidós de junio de dos mil veintidós, con declaración que eleva el monto de la indemnización a la suma de ciento diez millones de pesos (\$110.000.000)

Considerando:

1º) Que, el Consejo de Defensa del Estado deduce recurso de casación en la forma fundado en el artículo 768 N° 5 en relación 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil Indica que la sentencia recurrida no contiene consideraciones de hecho o de derecho que sirvan de fundamento para la rebaja del monto de la indemnización, lo que resulta evidente al analizar cada uno de los considerandos del fallo recurrido.

Los sentenciadores de alzada no consignaron elemento probatorio alguno o razonamientos de hecho o de derecho, que les hubiesen permitido válidamente considerar, explicar y justificar que el monto otorgado por el fallo apelado encontraba un fundamento diverso de los simplemente discrecionales al regular un quantum que dista, con mucho, de las indemnizaciones concedidas en las sentencias aludidas.



Tampoco se advierte, en tal sentido, que los sentenciadores, en modo alguno, hubiesen aportado algún razonamiento valorativo específico, o desarrollado algún nuevo análisis respecto de los antecedentes establecidos por la sentencia de primera instancia, que les permita fundar su sorprendente decisión.

Es así como el fallo recurrido omite del todo explicar cómo arribó a la desmedida valoración de perjuicios que termina por conceder, no indica en qué parámetros se basó, no analiza la declaración judicial emitida por el máximo tribunal en el caso análogo que había de servirle de base ni explica, por ende, del modo que lo exige la ley, por qué termina por discriminar a favor del demandante de autos.

Al elevar el quantum indemnizatorio hasta los \$ 110.000.000, además de omitir en la decisión los fundamentos o motivaciones que expliquen la razón que llevó a ello, el fallo recurrido altera y rompe todos los precedentes establecidos con anterioridad en materia de monto indemnizatorio del daño moral.

Pide se invalide la sentencia recurrida y acto seguido, sin nueva vista, pero separadamente, dicte con arreglo a la ley la correspondiente sentencia de reemplazo que se expida en torno a las apelaciones deducidas por las partes del presente litigio y se confirme la sentencia de primera instancia.

2º) Que, de la lectura del recurso se advierte que lo que se les reprocha a los jueces del fondo es haber condenado al fisco a un monto superior al fijada en primera instancia por el daño moral padecido por el demandante, sin efectuar las debidas consideraciones de hecho y de derecho que sirven de apoyo a su decisión judicial



Con estos argumentos solicitó la invalidación de la sentencia, a fin que en su reemplazo se resuelva rechace la demanda en todas sus partes.

3°) Que son hechos asentados por la sentencia de primera instancia y confirmados por la de segunda instancia en su fundamento trece los siguientes:

“Luis Fernando Ojeda Paillan, fue sujeto de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, todo constitutivo de un ilícito, para lo que nos convoca, de carácter civil, consistente en su núcleo, en lo que el propio Estado ha reconocido, a través de los procesos de reparación estatal, los cuales fueron perpetrados al menos y concretamente, en la ciudad de Punta Arenas, particularmente en el Regimiento Pudeto, y posteriormente en Isla Dawson, todo en los años 1973 y 1974, sufriendo en un principio la pérdida de su trabajo, luego una privación de libertad, interrogatorios, golpes y trabajos forzados, así como el alejamiento, en tal contexto de su familia, durante este periodo de tiempo. Posteriormente, se ha dado cuenta de su traslado de ciudad, dentro del país, saliendo posteriormente él del mismo, primero solo y luego, en compañía de su familia, con destino a Alemania, lugar en el cual accedió a diversas oportunidades que le permitieron desarrollarse a él y a su entorno familiar, no sin dificultades, pero reconociendo finalmente un proceso exitoso en la reelaboración de su plan de vida. Cabe señalar también, que sometido a proceso, el que aun cuando ha sido de aquellos que en su generalidad y especificidades no cumplió con los estándares de uno debido, fue dejado en libertad. Así como por otro lado, y dada la prueba aportada, en gran parte dados sus recursos propios, si bien todo este proceso significó considerables daños, aquellos directos de los ilícitos cometidos por agentes del Estado no ha mantenido al actor sumido en una depresión, muy



por el contrario, la sintomatología asociada sólo fue verificada comparativamente –con otros sujetos de violaciones de derechos humanos, en relación a procesos concluidos y revisados por esta jueza, y cuyos datos no serán aportados debido a la debida reserva que corresponde a la naturaleza de los mismos- como menor y en remisión, esto último, a juicio de la experta evaluadora que declara ante estrados.

En este orden de ideas, impresionó también al Tribunal como cierto, que el demandante pese a que tuvo la posibilidad de retornar a Chile, asumió como plan de vida aquel que logró desarrollar de manera exitosa en Alemania, sin perjuicio de haber desarrollado incluso negocios en Chile, una vez que el país le ofreció condiciones que estimó seguras, accediendo a la reparación y sus beneficios, siendo del caso que los mismos no compensan ciertamente tanto el daño causado como su sufrimiento, pero que además, no alcanzan a cubrir su estándar de vida, hoy garantizado –en parte- por el Estado Alemán, y las oportunidades que en el mismo logró alcanzar, según expresa en su presentación, por lo que sigue manteniendo su domicilio en el país extranjero ya mencionado”.

4°) Que en relación al vicio de casación formal denunciado, se hace necesario subrayar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran *–en lo que atañe al*



presente recurso- en su numeral 4°, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.

5°) Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5° transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920, un Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión aquéllos sobre que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción entre los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido objeto de discusión.

Agrega que si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida *–prosigue el Auto Acordado–* deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente. Prescribe, enseguida, que una vez establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el



fallo; agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera.

6°) Que la importancia de cumplir con tal disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial (SCS Rol N° 4835-2017 de 8 de enero de 2017).

7°) Que, en el mismo sentido y, complementando lo anterior, la fundamentación adecuada de las resoluciones judiciales es parte esencial de la garantía del debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en este punto: las garantías de debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive civiles, en la medida que determinen o afecten los derechos de las personas (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Párrafo 28; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Párrafo 124; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párrafo 70).



La no observancia de lo anterior, constituye una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de otros tratados internacionales de derechos humanos que consagran y protegen el derecho al debido proceso, y que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, por la disposición contenida en el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental de 1980.

8º) Que útil resulta traer a colación lo expresado por los juristas nacionales don Mario Mosquera Ruiz y don Cristián Maturana Miquel, en su libro “Los Recursos Procesales”, quienes al analizar precisamente la causal del aludido arbitrio han dicho:

“En el mismo sentido, se nos ha señalado que esta causal concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones mas no en la impropiedad de estas; la circunstancia que las consideraciones sean erradas o deficientes no se sanciona con la nulidad del fallo, puesto que ese vicio se constituye según la ley por la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se ha entendido se produce, asimismo, cuando entre sí son contradictorias o se destruyen unas a otras” (MOSQUERA RUIZ, Mario y MATURANA MIQUEL, Cristián: Los Recursos Procesales. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2010. P. 250).

9º) Que, el que la determinación del monto dinerario que permita en algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, deba necesariamente realizarse *prudencialmente*, ante la imposibilidad de fijar con alguna exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no conlleva que esa evaluación sea arbitraria y antojadiza para el órgano



jurisdiccional, sino que ante la imposibilidad de concretarla sirviéndose de fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela y moderación, lo que por cierto le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, pero que no implica en modo alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a arribar a esa conclusión.

10º) Que, al dictar la sentencia impugnada confirman la sentencia apelada con declaración que la condena al fisco por concepto de indemnización de perjuicios a la suma de 110 millones de pesos (\$110.000.000), los sentenciadores se hacen cargo de los motivos que les llevaron a condenar en el motivo primero y segundo indicando que;

***“PRIMERO:** Que no cabe duda que la aflicción y dolor sufridos por la víctima de los actos ilegítimos e inhumanos, que provienen del actuar de agentes del Estado, reconocidas como tales por la Comisión Valech, debe ser resarcida del modo más íntegro posible, teniendo particularmente a la vista, en este caso, todas las consecuencias que tuvieron los hechos en la vida futura del demandante, además de los padecimientos que debió tolerar, consistentes en privación de derechos, trabajo forzado, relegación, exilio, además de los padecimientos físicos sufridos.*

***SEGUNDO:** Que, no escapa al criterio de estos sentenciadores que la regulación del daño moral no puede regirse por criterios de carácter absoluto, que de un modo objetivo permitan determinar su quantum y, de otra parte, el padecimiento sufrido es de tal entidad, que solo puede mitigarse mediante un*



resarcimiento monetario, por parte del Estado, por lo que, teniendo presente la magnitud del daño ocasionado y sus circunstancias y el tiempo durante el cual se afectaron los derechos, la integridad física y psíquica del demandante y las consecuencias determinantes de su vida futura, su monto se regulará prudencialmente, en el monto que se señalará en la parte resolutive de esta sentencia.

10°) De lo expuesto, aparece con meridiana claridad que la sentencia materia del recurso dio cabal cumplimiento a las exigencias legales que el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil le impone, sin que exista mérito alguno para cuestionarla a través del arbitrio en examen. Distinto es el caso que el impugnante no comparta los razonamientos jurídicos o la aplicación de una norma en particular en cuanto a sus requisitos legales, sin embargo dichas discrepancias no pueden servir de base para construir una causal que sólo está dirigida a controlar que la sentencia cumpla con ciertos requisitos formales mas no para cuestionar la aplicación o inaplicación normativa, pues tal reproche la ley lo ha reservado para la casación sustancial, motivo por cual se desestimarán la causales de nulidad formal en análisis.

De manera que la simple discrepancia en las conclusiones a que ha arribado el Tribunal, conforme se ha venido razonando no es materia del recurso interpuesto, por tal razón el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 766, 768 N° 5, 786 y 808 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

Que **se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de la sentencia de catorce de



noviembre de dos mil veintidós dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en la causa Rol 252-2022, la **que no es nula**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama

N° 160.767-2022

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firma el Ministro Sr. Brito, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con permiso.



En Santiago, a tres de octubre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

